

Reseña

Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky

(editores)

Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura.

Primera edición - Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2013, 461 pág., ISBN 978-987-629-344-0

Mariano Baladrón

Universidad Nacional de Lanús

El libro es una aproximación holística a la cuestión de la complicidad civil con el terrorismo de Estado. Desde una pluralidad de miradas y una perspectiva transdisciplinar, los autores de los distintos ensayos aportan a la comprensión del fenómeno de la preparación de las condiciones de posibilidad y el sostenimiento del gobierno de facto por parte de distintos sectores de la sociedad, con especial énfasis en los empresarios.

El trabajo se estructura en torno a una introducción a cargo de los editores y ocho partes en las que se recorren a lo largo de los capítulos múltiples aproximaciones al objeto de estudio, haciendo foco en los distintos actores de la época: desde los *think tanks* liberales que aportaron ministros y cuadros de distinto orden al gobierno iniciado el 24 de marzo de 1976, a las corporaciones empresarias del agro y la industria que se vieron beneficiadas en algunos casos y perjudicadas en otros, pasando por el análisis del comportamiento de la cúpula sindical en la represión de los trabajadores. También cuenta con un apartado final, de tipo propositivo, que está teniendo amplia repercusión en el debate público actual.

Con una mirada al escenario internacional, se analizan la evolución económica de aquellos años, la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, se la confronta con la estrategia diplomática del gobierno de facto y se muestra como esto definió los apoyos y rechazos del resto de los países al régimen.

Desde el punto de vista macroeconómico, el libro analiza cómo las tensiones económico-sociales previas al golpe fueron resueltas en pos de un nuevo modelo de acumulación de capital sustentado en la valorización financiera, la desindustrialización, la liberalización de la economía y la represión de los trabajadores; así como el uso de las finanzas públicas en función del modelo de país excluyente que se impuso. Del mismo modo se estudia el rol del financiamiento externo en la compra de lealtades en sectores clave de la política, la economía nacional y la utilización para el aumento de las partidas presupuestarias del sector militar.

El libro indaga también en la relación entre complicidad empresarial y responsabilidad legal y se analiza si la contribución económica en la violación de derechos humanos puede ser considerada antijurídica desde las perspectivas del derecho internacional y local. Desde el punto de vista propositivo, también se analizan las condiciones que permitirían responsabilizar civilmente las complicidades, así como la ausencia de efectos del paso del tiempo (imprescriptibilidad) sobre sus acciones, considerando la corresponsabilidad de esos sectores con el terror de Estado.

Los análisis de casos incluyen el sector de la industria automotriz (Ford y Mercedes Benz), atendiendo tanto al aporte de recursos logísticos brindado oportunamente por las empresas a los militares como a los avances y obstáculos en los juicios en nuestro país y en el exterior que involucran a los gerentes de esas empresas; al sector metalúrgico (Acindar y Techint), cuyo análisis permite hablar de un verdadero plan integral de los empresarios en la preparación y puesta en funcionamiento del golpe, que tiene en los secuestros y desapariciones de personas durante 1975 en las plantas metalúrgicas de Villa Constitución un tubo de ensayo del terror por venir. Algo similar ocurre con el análisis del caso Blaquier, en donde el acento está puesto en las rupturas y continuidades de la relación entre sistema judicial y dictadura, por un lado, y en el análisis de la ley de Seguridad Nacional de 1974, que en el Ingenio Ledesma permitió la intervención del sindicato en 1975, por el otro.

También son estudiados, con distintos niveles de profundidad en la indagación, una variedad de casos de apropiación ilegal de empresas bajo el accionar arbitrario de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA). Además se repasan las políticas de comunicación de la dictadura y el caso de la apropiación ilegal de la empresa de papel para diarios Papel Prensa para ser entregada a precio vil a los diarios *Clarín* y *La Nación* que funcionó como prenda de paz para que los dueños de los prin-

cipales medios gráficos del país aceptaran y justificaran la censura y brindaran su apoyo explícito al gobierno de facto.

Un aspecto novedoso del libro es el análisis específico que se le da a la complicidad entre la cúpula eclesiástica y la castrense en los años del terrorismo de estado, ya que se propone considerar lo actuado por los miembros de la Iglesia como acciones de carácter estatal, en sintonía con las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Otro valioso aporte es la reconstrucción de la historia política y económica de la relación entre Italia y Argentina en los años anteriores y posteriores al golpe y el rol que tuvo la logia Propaganda Due, cuyos vínculos llegan al gobierno derrocado en 1976. Para continuar la indagación se propone la creación de una comisión parlamentaria mixta de ambos países que analice el rol y las responsabilidades que podría tener Italia como consecuencia de lo actuado en aquellos años.

En el último capítulo, antes de pasar a las conclusiones y al aspecto propositivo, se analizan las complicidades de una parte de los abogados agrupados en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y en el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia.

El trabajo, visto en su conjunto, es una reconstrucción integral de la complicidad civil con el terrorismo de Estado. Muchas de estas cuestiones, que a esta altura nos obligan a hablar de un golpe cívico-militar-empresarial-eclesiástico, empezaron a sonar cada vez con más fuerza en las marchas por la memoria, verdad y justicia de los últimos años. En el terreno de la investigación periodística destaca el excelente trabajo de Vicente Muleiro.¹

El libro que aquí se reseña contiene un valioso aporte en términos de políticas de la memoria. En el apartado final se propone la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, creada por ley nacional, que contribuya a investigar la complicidad del poder económico, que exponga oficial y públicamente las cuestiones más relevantes y las consecuencias que aun hoy se arrojan sobre la economía, la política y la sociedad, de manera de proyectar un mensaje claro a futuro.

En esa línea, cabe mencionar que la Legislatura de Río Negro creó a fines de marzo de este año una comisión para investigar a los actores económicos que colaboraron en los delitos de lesa humanidad; se trata de la primera de su tipo en el mundo, creada siguiendo la propuesta del libro aquí reseñado, tal como lo indican los mimos legisladores en sus fundamentos. Asimismo, se presentó en abril de este año, en el Congreso Nacional, un proyecto para la creación de una comisión bicameral de investigación del aspecto económico del terrorismo de estado.

La Argentina es pionera en materia de comisiones de la verdad. La de la década del ochenta inició el camino que permitió el juicio a las juntas militares y logró correr los límites que el propio gobierno democrático veía para los juicios. Pese a las resistencias del Ministro del Interior Antonio Tróccoli y del propio Presidente Alfonsín, la CONADEP cambió su estrategia² a fines de enero de 1984 y orientó su investigación a describir el sistema de desaparición y a identificar a los responsables, aunque no pudo superar la lectura “bidemoníaca” de los hechos.

Se trata ahora de continuar el camino iniciado allí y que fue el puntapié para que la justicia pudiera investigar, a partir del 2003 ya de forma irreversible, las violaciones de los derechos humanos y avanzar en el conocimiento de la relación entre empresarios y militares que instigaron, posibilitaron y/o fueron causantes de aquellos crímenes y a los mecanismos de financiamiento que los hicieron posibles.

Hoy el poder militar que se alzó contra la democracia está derrotado, pero el poder empresario cómplice continúa al acecho y cada tanto los dirigentes de las patronales rurales salen a cuestionar al poder político resultante de las urnas mientras empresarios cartelizados socavan apoyos con su política de precios. Desde los medios audiovisuales concentrados se le exige al gobierno democrático reducción del gasto público, dólar caro y endeudamiento externo. Por eso avanzar en una comisión que proyecte luz sobre las complicidades que les permitieron llegar hasta donde están es el camino necesario de emancipación para que realmente se cumpla el ideal del **nunca más**.

¹ Vicente Muleiro, *1976: el golpe civil*. Buenos Aires: Ed. Planeta 2011 (2ª edición).

² Emilio Crenzel, *La historia política del Nunca Más: la memoria de las desapariciones en la Argentina*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.